Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

**VISTO** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **01434/INFOEM/IP/RR/2025**, interpuesto por **XXXXXX XXXXXXX,** en lo sucesivola parte **Recurrente,** en contra de la respuesta a la solicitud de información con número de folio **00041/OASTLALNE/IP/2025,** por parte del **Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** El **veinticuatro de enero de dos mil veinticinco,** la parte **Recurrente** presentó, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, mediante la cual requirió la información siguiente:

 *“SOLICTO LA CÉDULA PROFESIONAL QUE AVALE EL NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS DIRECTORES DE: OFICIALIA MAYOR, JURIDICO, CONTRALORIA, CONSTRUCCION, OPERACION Y RECAUDACION, ASI COMO LA CERTIFICACION DEL INSTITUTO HACENDARIO QUE POR LEY ESTAN OBLIGADOS A TENER LA DIRECCION DE OPERACION, OFICIALIA MAYOR, UNIDAD DE TRANSPAENCIA Y CONTRALORIA.****”*** *(sic)*

**Modalidad de Entrega:** a través del **SAIMEX.**

**2. Respuesta.** El **doce de febrero de dos mil veinticinco,** el **Sujeto Obligado** envió su respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“…Le envío archivos electrónicos con respuesta a su solicitud de información con número de folio SAIMEX 00041/OASTLALNE/IP/2025...” (sic)*

El **Sujeto Obligado** adjuntó lo siguiente:

- Oficio número OPDM/OM-0103/2025, del diez de febrero de dos mil veinticinco, mediante el cual la persona titular de la Oficialía Mayor, manifestó anexar, respecto de la cédula profesional de los servidores públicos que ostentan los seis cargos señalados en la solicitud, el archivo que contiene la versión pública aprobada mediante el acuerdo OPDM/Acuerdo-03/CT/02SE/2025, en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de los documentos respectivos, y, respecto de la Certificación del Instituto Hacendario de los cuatro servidores públicos que ostentan los cargos señalados en la solicitud, la versión pública del Certificado de Competencia Laboral en la Norma Institucional "Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Pública Municipal" expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México, en favor del servidor público que ostenta el cargo de Titular de la Dirección de Operación Hidráulica, del Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia "Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública", expedida por el Consejo Nacional de Normalización de Certificaciones de Competencias Laborales, en favor de la servidora pública que ostenta el cargo de Titular de la Unidad de Transparencia, aclarando que la expedición de la Certificación correspondiente a los Titulares de las Unidades de Transparencia, no es competencia del Instituto Hacendario del Estado de México; y respecto a los Certificados de Competencia Laboral de las personas Titulares de la Oficialía Mayor y de la Contraloría Interna, informó que, conforme al artículo 32 fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal, tal documental deberá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicien sus funciones.

- 2 Títulos profesionales, íntegros, 3 Cédulas profesionales, testadas, y una Constancia de Autenticación del Título Electrónico, testado.

- 1 Certificado de Competencia Laboral, íntegro, y 1 Certificado de Competencia Laboral, testado.

- Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el seis de febrero de dos mil veinticinco, en la cual se confirmó la propuesta de clasificación de la información como confidencial, realizada por la Oficialía Mayor, y se aprobó la emisión de la versión pública de la documentación con la cual se daría respuesta a la solicitud de información 00041/OASTLALNE/IP/2025.

**3. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **catorce de febrero de dos mil veinticinco,** la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**Acto impugnado:**

*“No me entregaron la información completa.” (sic)*

**Y, Razones o motivos de inconformidad**:

*“Solo me entregaron cédulas y títulos profesionales de las personas que quisieron, es decir, no esta completa la información, solicito que entreguen la totalidad de la información solicitada” (sic)*

**4. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**5. Admisión del Recurso de revisión.** El **diecinueve de febrero de dos mil veinticinco,** este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**6. Manifestaciones**. El **veintisiete de febrero de dos mil veinticinco,** el S**ujeto Obligado** remitió, a través de **SAIMEX,** lo siguiente:

- Oficio número OPDM/OM-0164/2025, del veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, mediante el cual la persona titular de la Oficialía Mayor ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, sin embargo, manifestó que en un ejercicio de máxima transparencia, adjuntaría en formato PDF el archivo que contiene el Certificado de Competencia Laboral en la Norma Institucional "Administrar la Obra Pública Municipal y Servicios relacionados con las mismas en el Estado de México", expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México, en favor del servidor público que ostenta el cargo de Titular de la Dirección de Construcción.

- 1 Certificado de Competencia Laboral, íntegro.

Una vez analizada la información, se hizo del conocimiento de la parte **Recurrente,** con la finalidad de que manifestara lo que a su derecho estimara conveniente.

En este sentido, el **siete de marzo de dos mil veinticinco,** la parte **Recurrente** remitió, mediante el SAIMEX, un escrito mediante el cual manifestó lo siguiente:

*“Con la información que presenta el Sujeto Obligado continua no cumpliendo con todo lo que se solicitó de origen, es decir, la esta negado, puesto que sigue faltando lo siguiente:*

*1. CÉDULA PROFESIONAL DE LAURA ADRIANA CAMARA CASTAN*

*2. CÉDULA PROFESIONAL DE ARTURO MONTALVO QUIROZ*

*3. CÉDULA PROFESIONAL DE CLAUDIA VERÓNICA AYALA RODRIGUEZ*

*4. FALTAN CERTIFICACIONES DEL INSTITUTO HACENDARIO DE 2 ÁREAS OFICIALIA MAYOR Y CONTRALORIA.*

*POR LO TANTO CONTINUAN NEGANDOSE A PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA, RATIFICANDO UNA SITUACION QUE ES EVIDENTE QUE NO HAN CUMPLIDO, SOLICITO ME ENTREGUEN LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION QUE SOLICITE.” (sic)*

**7. Cierre de instrucción.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar al expediente, el **diez de marzo de dos mil veinticinco**, la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el día **doce de febrero de dos mil veinticinco,** mientras que el recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente,** se tuvo por presentado el día **catorce de febrero dos mil veinticinco,** esto es, al segundo día hábil posterior a aquel en el que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada. En este sentido, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en las disposiciones legales referidas.

Además, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, es de suma importancia señalar que la parte **Recurrente**, no señaló un **nombre completo** con el cual desea ser identificado, como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX, no obstante no proporcionar un nombre no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*"****Las solicitudes*** *anónimas,* ***con nombre incompleto*** *o seudónimo serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."*

De acuerdo al análisis efectuado se advierte que resulta procedente la interposición del recurso y se concluye la acreditación plena de todos y cada uno de los elementos formales exigidos por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en vigor, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el **SAIMEX.**

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por la parte **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracción V del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***…***

***V.*** *La entrega de información incompleta;”*

**Tercero. Materia de la revisión.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte, que el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: **verificar si la información proporcionada por el Sujeto Obligado es adecuada y suficiente para satisfacer el derecho de acceso a la información pública** de la parte **Recurrente**, o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información.

**Cuarto. Estudio del asunto.** En primer lugar, es conveniente mencionar que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se transcribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”***

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados sólo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de interpretación con clave de control SO/003/2017, emitido por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que por rubro y texto, dispone lo siguiente:

 *“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.” (Sic)*

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”*

Es aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

Lo anterior, siempre y cuando no se trate de información clasificada como reservada o confidencial, cuya difusión pueda lesionar el interés jurídicamente protegido por la Ley, producir un daño mayor que el interés de conocerse, o bien, generar un daño en los derechos de las personas, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En el mismo tenor, los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones previstas en la Constitución Federal por interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes de la materia.

Ahora bien, del análisis de la solicitud de información, motivo del recurso de revisión que ahora se resuelve, se advierte que la parte **Recurrente** requirió al **Sujeto Obligado** le proporcione, información consistente en lo siguiente:

1. Cédula Profesional que avale el nivel de estudios de los Directores de: Oficialía Mayor, Jurídico, Contraloría, Construcción, Operación y Recaudación.

2. Certificación del Instituto Hacendario que por ley están obligados a tener la Dirección de Operación, Oficialía Mayor, Unidad de Transparencia y Contraloría.

Cabe señalar que las unidades administrativas a las que hace referencia la persona solicitante, de conformidad con el artículo 30 del Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tlalnepantla, son las siguientes:

*“****Artículo 30****.- Para el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades, así como para el estudio, planeación y despacho de los asuntos en diversos ramos de la Administración del Organismo, la persona titular de la Dirección General se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:*

***I.*** *Dirección General;*

*...*

***b) Jefatura de la Unidad de Transparencia***

*...*

***V. Dirección Jurídica***

*...*

***VI. Contraloría Interna***

*...*

***VII. Oficialía Mayor***

*...*

***VIII. Dirección de Construcción***

*...*

***IX. Dirección de Operación Hidráulica***

*...*

***X. Dirección de Recaudación***

***...”***

El **Sujeto Obligado,** por conducto de la persona titular de la Oficialía Mayor hizo entrega, en versión de los títulos y cédulas profesionales de los servidores públicos que ostentan los seis cargos referidos en el punto 1 de la solicitud, conforme a la siguiente relación:





Mientras que, para atender el punto 2 de la solicitud, hizo entrega del Certificado de Competencia Laboral en la Norma Institucional "Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Pública Municipal" expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México, en favor del servidor público que ostenta el cargo de Titular de la Dirección de Operación Hidráulica; del Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia "Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública", expedida por el Consejo Nacional de Normalización de Certificaciones de Competencias Laborales, en versión pública, en favor de la servidora pública que ostenta el cargo de Titular de la Unidad de Transparencia, aclarando que la expedición de la Certificación correspondiente a los Titulares de las Unidades de Transparencia, no es competencia del Instituto Hacendario del Estado de México; y respecto a los Certificados de Competencia Laboral de las personas Titulares de la Oficialía Mayor y de la Contraloría Interna, informó que, conforme al artículo 32 fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tal documental deberá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicien sus funciones.

 Asimismo, hizo entrega del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el seis de febrero de dos mil veinticinco, en la cual se confirmó la propuesta de clasificación de la información como confidencial, realizada por la Oficialía Mayor, y se aprobó la emisión de la versión pública de la documentación con la cual se daría respuesta a la solicitud de información 00041/OASTLALNE/IP/2025.

Sin embargo, al no estar conforme con los términos de la respuesta emitida, la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, donde señaló como motivo de inconformidad, en lo medular, que la información se le entregó incompleta, al haberse entregado cédulas y títulos profesionales de las personas que el Sujeto Obligado quiso, por lo que en el acto requirió le fuera entregada la totalidad de la información solicitada.

Durante el periodo de manifestaciones el **Sujeto Obligado** ratificó en lo sustancial la respuesta emitida en primera instancia, sin embargo, en un ejercicio de máxima transparencia, hizo entrega del Certificado de Competencia Laboral en la Norma Institucional "Administrar la Obra Pública Municipal y Servicios relacionados con las mismas en el Estado de México", expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México, en favor del servidor público que ostenta el cargo de Titular de la Dirección de Construcción.

Dicha información se hizo del conocimiento de la persona solicitante, con la finalidad de que manifestara lo que a su derecho estimara conveniente, prerrogativa que hizo valer en los siguientes términos:

*“Con la información que presenta el Sujeto Obligado continua no cumpliendo con todo lo que se solicitó de origen, es decir, la esta negado, puesto que sigue faltando lo siguiente:*

*1. CÉDULA PROFESIONAL DE LAURA ADRIANA CAMARA CASTAN*

*2. CÉDULA PROFESIONAL DE ARTURO MONTALVO QUIROZ*

*3. CÉDULA PROFESIONAL DE CLAUDIA VERÓNICA AYALA RODRIGUEZ*

*4. FALTAN CERTIFICACIONES DEL INSTITUTO HACENDARIO DE 2 ÁREAS OFICIALIA MAYOR Y CONTRALORIA.*

*POR LO TANTO CONTINUAN NEGANDOSE A PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA, RATIFICANDO UNA SITUACION QUE ES EVIDENTE QUE NO HAN CUMPLIDO, SOLICITO ME ENTREGUEN LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION QUE SOLICITE.” (sic)*

Como puede advertirse, en la etapa de manifestaciones, la parte **Recurrente** precisó las razones por las cuales consideraba que la información entregada estaba incompleta, las cuales consisten, específicamente, en la omisión del **Sujeto Obligado** en proporcionar la cédula profesional de los titulares de la Oficialía Mayor, la Dirección Jurídica y la Dirección de Recaudación, así como la Certificación de competencia laboral de los titulares de la Oficialía Mayor y la Contraloría Interna.

En este tenor, dado que no manifestó agravios respecto de la cédula profesional de los titulares de la Contraloría Interna, la Dirección de Construcción y la Dirección de Operación Hidráulica, así como la certificación de competencia laboral de los titulares de la Dirección de Operación Hidráulica y la Jefatura de la Unidad de Transparencia, esta parte de la respuesta, al no haber sido impugnada, debe declararse consentida, ya que al no haber realizado manifestaciones de inconformidad al respecto, no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto, pues en el caso concreto se infiere que la información proporcionada, satisface la solicitud presentada respecto de los requerimientos que no fueron combatidos.

Lo anterior es así, debido a que cuando la parte **Recurrente** impugna la respuesta del **Sujeto Obligado**, y éste no expresa razón o motivo de inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, dichos rubros deben declararse atendidos, pues se entiende que ésta conforme con la información entregada al no contravenir la misma.

Lo anterior se apoya del criterio de interpretación con clave de control SO/001/2020, emitido por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales, INAI, que lleva por rubro y texto, lo siguiente:

*“****Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis.*** *Si en su recurso de revisión, la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio de fondo de la resolución que emite el Instituto.”*

Asimismo, resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

En consecuencia, se insiste, ante la falta de impugnación eficaz, la información entregada debe declararse consentida por la persona solicitante, y por consiguiente, no es procedente el análisis de fondo en la resolución.

Una vez establecidas las posturas de las partes, se procede al análisis de los requerimientos de información combatidos, así como la información proporcionada por el **Sujeto Obligado,** en contraposición con el motivo de inconformidad alegado por la parte **Recurrente,** con la finalidad de determinar si el Derecho de acceso de esta se satisfizo, o en su defecto, señalar los documentos que en el ejercicio de sus atribuciones pudo haber generado, y que, de manera enunciativa más no limitativa, pudieran colmar dicho derecho, en caso de ser procedente.

Para efectos de lo anterior, es oportuno referir en primer lugar, que del marco normativo aplicable al **Sujeto Obligado,** de manera enunciativa más no limitativa, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, su Reglamento, así como el Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tlalnepantla, no se advirtió fuente obligacional que constriña a los servidores públicos titulares de la Oficialía Mayor, la Dirección Jurídica y la Dirección de Recaudación del Organismo a contar necesariamente con una cédula profesional, y de ser el caso, que dichos documentos deban ser en un área de conocimiento específico; o a las personas titulares de la Oficialía Mayor o la Contraloría Interna del Organismo a contar con una certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México.

Como sustento al argumento anterior, es oportuno traer a colación el contenido del artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que en su parte conducente dispone lo siguiente:

***Artículo 32****.-* ***Para ocupar los cargos de*** *Secretario; Tesorero; Director de Obras Públicas, de Desarrollo Económico, Director de Turismo, Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, Ecología, Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social, de las Mujeres, del Campo o equivalentes,* ***titulares*** *de las unidades administrativas, de Protección Civil y* ***de los organismos auxiliares se deberán satisfacer los siguientes requisitos:***

*...*

***III.******Contar con título profesional o acreditar experiencia mínima de un año en la materia, ante la o el Presidente o el Ayuntamiento****, cuando sea el caso, para el desempeño de los cargos que así lo requieran;*

***IV****.* ***Contar con certificación de competencia laboral en la materia del cargo que se desempeñará,******expedida por institución con reconocimiento de validez oficial.*** *Este requisito deberá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicien sus funciones;”*

Del precepto en cita se desprende que, para ocupar el cargo de **titular de los organismos auxiliares,** como lo es **el titular del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tlalnepantla**, el servidor público debe satisfacer, entre otros requisitos, contar con título profesional o acreditar experiencia mínima de un año en la materia ante el o la Presidente Municipal o el Ayuntamiento, según sea el caso, para el desempeño de los cargos que así lo requieran; así como contar con certificación de competencia laboral en la materia del cargo que se desempeñará, expedida por institución con reconocimiento de validez oficial, el cual **debe acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en la que se inicien funciones**.

Asimismo, el Instituto Hacendario del Estado de México, a través de la Comisión Certificadora de Competencia Laboral para el Servicio Público del Estado de México, COCERTEM, contempla la Norma Institucional de Competencia Laboral *Administrar el Organismo Operador de Agua en el Estado de México,* que describe las funciones de la Dirección de los Organismos Operadores de Agua en el Estado de México, las cuales se refieren a planear, coordinar y evaluar las acciones para la prestación del servicio.

No obstante, en el asunto que nos ocupa, la Unidad de Transparencia, con la finalidad de garantizar el Derecho de acceso de la persona solicitante, de conformidad con los artículos 53, fracciones II y IV y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, turnó la solicitud a la Oficialía Mayor, como el área competente para conocer de la materia de la misma, al ser la unidad administrativa encargada de planear, programar y eficientar la administración de los recursos humanos del Organismo, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tlalnepantla.

Para lo cual se auxilia de la Subdirección Administrativa, la cual a través del Área de Recursos Humanos, cuyas atribuciones en su parte conducente, en términos del artículo 67 del referido Reglamento, son las siguientes:

- **Verificar que el personal que ingresa al Organismo cumpla con todos los requisitos** establecidos y de acuerdo al perfil del puesto.

- **Integrar y actualizar de manera adecuada y oportuna los expedientes del personal**; de acuerdo a la normatividad aplicable.

Como puede advertirse, en el presente asunto la Unidad de Transparencia cumplió el procedimiento de búsqueda establecido en los artículos 151, 159, 160, 162, 163, 164, 165 y 166, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipio, el cual se constituye como la garantía primaria del derecho humano de acceso a la información pública, el cual se rige por los principios de simplicidad, rapidez, gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a las personas solicitantes con el fin de otorgar la protección más amplia de este derecho.

En esta línea de pensamiento, en un ejercicio de máxima transparencia, la persona servidora pública habilitada de la Oficialía Mayor proporcionó los documentos que obran en los archivos de personal de los servidores públicos que ostentan los cargos referidos en la solicitud, en los siguientes términos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TITULAR** | **CÉDULA PROFESIONAL** | **CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL** |
| 1. Oficialía Mayor Laura Adriana Cámara Castán  | Título profesional de Maestría, integro. | Se cuenta con un plazo de seis meses para acreditarse el requisito.  |
| 2. Dirección JurídicaArturo Montalvo Quiroz | Título profesional de Licenciatura, integro. | (No se solicitó) |
| 3. Contraloría InternaCésar Armando Hernández Salazar | (No fue motivo de inconformidad) | Se cuenta con un plazo de seis meses para acreditarse el requisito.  |
| 4. Dirección de RecaudaciónClaudia Verónica Ayala Rodríguez | Constancia de autenticación de Título profesional de Maestría, en versión pública. | (No se solicitó) |

Con base en el análisis de la tabla anterior es posible concluir que la información proporcionada por el **Sujeto Obligado**, a través del área competente**,** es suficiente para tener por atendido el Derecho de acceso de la persona solicitante, ya que si bien, en el caso de la cédula profesional de los titulares de la Oficialía Mayor, la Dirección Jurídica y la Dirección de Recaudación, no proporcionó el documento requerido, si **proporcionó el documento que obra en sus archivos, y que da cuenta del grado académico con el que cuentan** **los servidores públicos que ostentan los cargos referidos, siendo este el título profesional.**

Como sustento a lo anterior, es de suma importancia mencionar que de conformidad con el artículo 1 de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, el título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado descentralizadas y por instituciones particulares que tengan reconocimiento de validez oficial en sus estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios.

En lo tocante a la cédula profesional, cabe decir que la misma **se emite a toda persona a quien legalmente se le haya expedido un título profesional** **o grado académico equivalente**, según lo prescrito en el artículo 3 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional*,* precepto que para mayor ilustración se transcribe a continuación:

*“****ARTICULO 3o.-******Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula******de ejercicio con efectos de patente****, previo registro de dicho título o grado.”*

La cual autoriza oficialmente a una persona en el ejercicio de su profesión, siendo una facultad potestativa la obtención de dicho documento, **siempre que se haya obtenido un título profesional o equivalente,** ya que de conformidad con el artículo 23, fracción IV de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el distrito Federal, es facultad de la Dirección General de Profesiones expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales.

En tal sentido, se puede concluir que el título profesional proporcionado da cuenta de que las personas titulares de la Oficialía Mayor, la Dirección Jurídica y la Dirección de Recaudación cuentan con el grado académico respectivo, sin perder de vista además que la normativa en la materia no establece como requisito concretamente el “presentar” título profesional y/o cédula profesional, sino que se debe acreditar que se cuenta con dicho grado académico **cuando este sea un requisito obligatorio**, por lo que debe entenderse que los servidores públicos cuentan con la potestad de entregar la digitalización de aquel documento con validez oficial que dé cuenta del cumplimiento de dicho requisito cuando así lo sea, como pudiera ser la digitalización del título profesional, la constancia de autenticación del título electrónico emitido por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación; la cédula profesional, emitida por la Dirección General de Profesiones, entre otros documentos, se insiste, con validez oficial.

Y, si bien, a través del título profesional la persona solicitante puede conocer el grado académico que ostentan los titulares de la Oficialía Mayor, la Dirección Jurídica y la Dirección de Recaudación, no escapa de la óptica de este Instituto que su pretensión consiste en obtener, concretamente, la digitalización de la cédula profesional, sin embargo, no debe olvidarse que, como ha quedado precisado en el presente estudio, **no hay fuente obligacional que constriña a estos a acreditar determinado grado de estudios para ocupar los cargos**, asimismo, que la persona servidora pública habilitada del área competente para administrar o poseer la información, anexó los documentos existentes en los expedientes laborales de los servidores públicos, se entiende que esta realizó la búsqueda de la información en los archivos que obran en su poder, concretamente en el expediente de personal de los servidores públicos que ostentan los cargos referidos en la solicitud, de la cual obtuvo los documentos que acreditan el nivel de estudios de estos, siendo el título profesional, es decir, de manera implícita reconoció que no cuenta con la cédula profesional como se solicita, sin embargo, en aras de garantizar el Derecho Humano de acceso a la información de la persona solicitante, remitió los documentos que obra en su poder y que dan cuenta del grado académico que estos servidores públicos ostentan.

En tal contexto, si bien, como lo refirió la parte **Recurrente** en su recurso de revisión, faltaron documentos, entendiéndose respecto al punto en análisis, las cédulas profesionales de los titulares de la Oficialía Mayor, la Dirección Jurídica y la Dirección de Recaudación, no es procedente ordenar la entrega de dichos documentos o en su caso una declaratoria de inexistencia de los mismos, bajo la premisa de que los Sujetos Obligados sólo deben proporcionar aquella información que hubieran generado en el ejercicio de sus atribuciones **y que obre en sus archivos**, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, lo que a *contrario sensu* significa que **no se está obligado a proporcionar lo que no obre en sus archivos.**

Y, menos aún, los Sujetos Obligados se encuentran obligados a generar documentos, a fin de atender las solicitudes de acceso a la información que les sean formuladas, tal y como se desprende del mismo texto del artículo 12 de la Ley de la Materia en consulta, por lo tanto este Organismo Garante reitera que a través de los títulos profesionales entregados ha quedado satisfecha la pretensión de la persona solicitante, por cuanto hace al punto en análisis.

Cabe mencionar además que los títulos profesionales de las personas titulares de la Oficialía Mayor y la Dirección Jurídica se proporcionaron íntegros al no contener datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, mientras que en el caso de la constancia de autenticación de título profesional de la persona titular de la Dirección de Recaudación, se testó la Clave Única de Registro de Población, CURP, cuya clasificación como información confidencial se sustenta con el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, al integrarse de datos personales que solo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, que le hacen plenamente identificable, en términos artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Por otro lado, respecto de la certificación de competencia laboral, con excepción de la persona titular de la Unidad de Transparencia, según lo dispuesto en el artículo 57, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la normativa aplicable no establece de manera clara que los servidores públicos que ostentan los cargos señalados en la solicitud deban acreditar dicho requisito de manera obligatoria, por lo tanto, se entiende que se trata de una facultad potestativa, en cuyo caso, debe considerarse el plazo para acreditar la competencia laboral es de seis meses contados a partir de la fecha del nombramiento, de conformidad con el artículo 32, fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Así las cosas, derivado de la consulta efectuada por este Organismo Garante, en el portal IPOMEX del **Sujeto Obligado**, se advirtió que las personas titulares de la Contraloría Interna y Oficialía Mayor **fueron dadas de alta en el cargo los días uno y dieciséis de enero de dos mil veinticinco**, respectivamente, como se ilustra a continuación para mejor referencia:





En este tenor, el requerimiento de información se tiene por atendido respecto de los titulares de la Contraloría Interna y la Oficialía Mayor, toda vez que de la respuesta emitida por la persona servidora pública habilitada del área competente se infiere que no administra o posee certificaciones de competencia laboral de dichos servidores públicos, al no obrar en su expediente de personal derivado de la búsqueda que se efectuó.

Por lo tanto, en los mismos términos vertidos en el estudio del punto anterior, no es procedente ordenar la entrega de información alguna, dado que el pronunciamiento del área competente declaró en automático la inexistencia de la información solicitada de modo que no existe obligación de justificar o allegar pruebas, y por ende no tiene aplicación lo estatuido en el artículo 49, fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De lo hasta aquí expuesto, se concluye que los motivos de inconformidad de la parte **Recurrente** devienen infundados, siendo procedente *Confirmar* la respuesta proporcionada por el **Sujeto Obligado** en términos del artículo 186, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 y 186 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E**

**Primero.** Son **infundadas** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el recurso de revisión **01434/INFOEM/IP/RR/2025**, por lo que, en términos de los argumentos de derecho señalados en el considerando **Cuarto**, se **Confirma** la respuesta del **Sujeto Obligado**.

**Segundo. Notifíquese,** vía **SAIMEX,** al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado** para su conocimiento, la presente resolución.

**Tercero. Notifíquese,** vía **SAIMEX,** a la parte **Recurrente** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que le causa algún perjuicio podrá impugnarla vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, EMITIENDO VOTO PARTICULAR CONCURRENTE; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA, EMITIENDO VOTO PARTICULAR CONCURRENTE; Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.